

## **SOBRE LA ACCIÓN POPULAR Y LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD EN EL ASUNTO ELLACURÍA (SENTENCIA 2193/2020 DE LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL)**

**MARÍA GARCÍA CASAS\***

### **I. HECHOS**

El 11 de septiembre de 2020, conocimos la sentencia de la Audiencia Nacional que resuelve el asunto del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y otras dos residentes, en la Universidad Central José Simeón Cañas (conocida como UCA), el 16 de noviembre de 1989. El procedimiento se inició, en noviembre de 2008, mediante una querrela interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el *Center for Justice and Accountability*, por los delitos de crímenes de lesa humanidad y terrorismo o asesinato en el contexto de crímenes contra la humanidad, cometidos por militares de El Salvador. En mayo de 2017, uno de los acusados – el coronel Inocente Orlando Montano– fue extraditado por Estados Unidos y, en diciembre de 2018, se concluyó el Sumario respecto de este y de René Mendoza, un integrante del batallón que ejecutó los delitos. El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, calificó los hechos a juzgar como cinco delitos de asesinato terrorista, solo los cometidos contra los ciudadanos españoles, mientras que la acusación popular y la recién incorporada acusación particular calificaron los hechos a juzgar como constitutivos de ocho delitos de asesinato terrorista. El 8 de junio de 2020 dio comienzo el juicio oral y la Sala acordó el sobreseimiento del procedimiento respecto de René Mendoza, por prescripción del delito.

Los hechos juzgados por la Audiencia Nacional se desarrollan en el contexto del conflicto civil en El Salvador, entre el gobierno de la Junta cívico-militar y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Fue, precisamente, la intención de mediar en el conflicto lo que le granjeó al rector de la UCA, el sacerdote español Ignacio Ellacuría, la enemistad con las fuerzas de extrema derecha dominantes en el Ejército, que veían en un potencial acuerdo de paz, el fin de sus privilegios. Un grupo de militares pertenecientes al grupo denominado “la tandoná”, que ostentaban altos cargos, eran especialmente beligerantes con Ellacuría y el resto de jesuitas, a quienes acusaban de mantener vínculos con el FMLN. El 15 de noviembre varios oficiales pertenecientes a “la tandoná” mantuvieron numerosas reuniones en las que el Jefe del Estado Mayor ordenó al Director de la Escuela Militar matar al padre Ellacuría, sin dejar testigos, valiéndose para dicha tarea de una unidad de élite (el batallón Atlacatl), que ya había realizado registros en la universidad. En la madrugada del 16 de noviembre, se llevó a cabo el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, incluido el padre Ellacuría, y dos mujeres de nacionalidad salvadoreña, una trabajadora de la residencia y su hija menor.

---

\* Profesora Ayudante del Área de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid, ([maria.garciac@uam.es](mailto:maria.garciac@uam.es))

Como se ha indicado, de entre los responsables de esos hechos, solo el coronel Inocente Orlando Montano – viceministro de Defensa y viceministro de Seguridad Pública– ha podido ser juzgado por la Audiencia Nacional, al ser extraditado por el Tribunal de del Distrito Este de Carolina del Sur, donde se encontraba el acusado cumpliendo condena por un delito de inmigración ilegal. Tras considerar probado que el acusado participó en la toma de decisión para perpetrar esos hechos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, le condenó como autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista. Solo fue posible la condena por el asesinato de los cinco sacerdotes jesuitas, de nacionalidad española, puesto que – aunque se considera también probado la autoría del asesinato de otro sacerdote, una trabajadora y su hija, de nacionalidad salvadoreña– los términos del acuerdo de extradición del acusado se limitaban a los delitos cometidos contra ciudadanos españoles.

## **II. PROBLEMAS JURÍDICOS**

En esta sentencia, encontramos cuatro cuestiones jurídicas que merecen ser destacadas. La primera hace referencia al alcance de la jurisdicción de los tribunales españoles. Como hemos indicado anteriormente, la Sala considera que los hechos declarados probados son constitutivos de ocho delitos de asesinato de carácter terrorista. Sin embargo, solo pudieron conocer del asesinato de los cinco ciudadanos españoles, por ser los delitos que sustentaron la decisión de acceder a la extradición, de la que el Estado que recibe no puede separarse, de acuerdo con el principio de especialidad en materia de extradición. No obstante, en el supuesto de que el acuerdo de extradición no se hubiera limitado al asesinato de los ciudadanos españoles, la aplicación del artículo 23.4.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fundamenta la jurisdicción de los tribunales españoles, de acuerdo con la sentencia, solo hubiera permitido a la Sala juzgar los delitos de terrorismo contra ciudadanos españoles. Es la redacción de la LOPJ, modificada por la LO 1/2014, la que impediría en cualquier caso el juicio por el asesinato terrorista de ciudadanos extranjeros. Es preciso recordar que, aunque la querella se interpuso en el año 2008 – cuando la LOPJ no contemplaba la concurrencia de vínculos de conexión con el Estado español para perseguir y juzgar los delitos en virtud del principio de justicia universal– la disposición transitoria de la LO 1/2014 ordena el sobreseimiento de aquellas causas que se encontraran en tramitación y que no cumplieran con los requisitos introducidos por la ley. Por tanto, pese a que la propia APDHE, haya calificado la sentencia como un hito histórico de justicia universal<sup>15</sup>, la jurisdicción de los tribunales españoles, en este caso, se sustenta en el principio de personalidad pasiva.

La segunda cuestión que queremos destacar es la referencia que hace la Sala a los procesos judiciales sustanciados en El Salvador para perseguir estos mismos hechos. La Audiencia Nacional había elevado una cuestión al Tribunal Supremo para que determinara si el enjuiciamiento de los hechos realizado en El Salvador, fue fraudulento o incompleto y, como tal, justificaba la continuación de la investigación por parte de los tribunales españoles, de acuerdo con el principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 23.5 LOPJ. Para el Tribunal Supremo, había indicios suficientes de que el proceso

---

<sup>15</sup> <https://apdhe.org/caso-jesuitas-la-audiencia-nacional-dicta-sentencia-condenatoria/>

llevado a cabo en El Salvador no garantizó la persecución efectiva de los responsables, “sino que, por el contrario, pudo tratar de sustraerlos de la acción de la justicia”<sup>16</sup>, al haberse permitido la ocultación y destrucción de pruebas y por las presiones externas a las que se sometió a los fiscales y los miembros del jurado, anulando la imparcialidad y la objetividad. Además, las únicas personas declaradas responsables en esos procesos se beneficiaron de la ley de Amnistía General – proclamada en 1993 y declarada inconstitucional en 2016. En atención a estas razones, el Tribunal Supremo afirmó la jurisdicción de los tribunales españoles.

La tercera cuestión de relevancia jurídica que presenta la sentencia guarda relación con la naturaleza terrorista de los asesinatos. Respondiendo a la defensa, que cuestionó la calificación de los hechos como terrorismo, la Audiencia Nacional alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y señala la fundamentalidad del elemento subjetivo – es decir, la motivación del delincuente– para distinguir los delitos terroristas de los comunes. De la interpretación que el Tribunal Supremo realiza de la Decisión Marco de 13 de junio de 2002, del Código Penal español y del IV Convenio de Ginebra, la Sala concluye que el asesinato de los jesuitas, una trabajadora y su hija menor, por el mero “hecho de que el Rector de la Universidad en la que vivían y trabajaban fuera un hombre de paz”<sup>17</sup>, tenía como finalidad la alteración grave de la paz pública, causar terror a la población civil y dificultar las negociaciones de paz. El ejercicio de la violencia para tal fin se ejerció, en este caso, desde el alto mando de las Fuerzas Armadas, que se arrogó de manera ilegal el monopolio de la violencia con el único fin de alterar gravemente la paz pública y perpetuarse en sus posiciones de privilegio en el Estado. Por esa razón, la sentencia lo califica como “terrorismo desde el Estado”. A juicio del tribunal, la ejecución de los delitos comenzó con la toma de la decisión de ejecutar a Ellacuría, en la cual el coronel participó de forma personal, directa y voluntaria, por lo que le considera penalmente responsable de estos. Fue el grupo de decisión, el Alto Mando y cada uno de sus integrantes, quienes tuvieron dominio del hecho, es decir, la posibilidad de cometer el delito o no, pues bastaba que dieran la orden para que ésta fuera ejecutada. Merece señalarse que la Sala consideró enervada la presunción de inocencia por las declaraciones testificales y los informes periciales, así como por el informe de la Comisión de la Verdad, constituida como consecuencia de los Acuerdos de Paz de Chapultepec y bajo los auspicios de Naciones Unidas. A juicio de la Audiencia Nacional, la investigación realizada por dicha Comisión, sobre los hechos ocurridos en la UCA, es una prueba especialmente relevante para el juicio “dada la objetividad con la que se elaboró, al efectuarse por mandato de un acuerdo de paz y, por lo tanto, de ambas partes en conflicto”<sup>18</sup> y por hallarse bajo las garantías de independencia que ofrece Naciones Unidas.

Por último, queremos señalar la mención del tribunal a la destacable labor de la acusación popular, a quienes considera determinantes para el inicio de la causa, al interponer la querrela justo antes de que prescribieran los delitos (sumándose con posterioridad la acusación particular), y para el buen desarrollo del proceso, logrando acabar con la

<sup>16</sup> Auto del Tribunal Supremo 2864/2015, de 20 de abril de 2015, p. 7.

<sup>17</sup> Fundamento jurídico séptimo.

<sup>18</sup> Fundamento jurídico octavo.

impunidad de estos crímenes. En atención a esto – y siguiendo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto– la Sala condena al pago de las costas procesales en que incurriera la acusación popular, además de la particular. Es especialmente relevante el reconocimiento expreso de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la tarea desempeñada por la acusación popular en este procedimiento, puesto que, desde la reforma introducida por la LO 1/2014, no serán perseguibles los delitos cometidos fuera del territorio español, cuando la querella se interponga en ejercicio de la acción popular. La exposición de motivos justificaba esta limitación por el carácter excepcional que tiene la jurisdicción extraterritorial, pero es precisamente la excepcional gravedad de los delitos, el motivo por el que el Derecho internacional faculta a los Estados para establecer la jurisdicción universal.

### **III. CONSIDERACIONES FINALES**

Esta sentencia ha sido una victoria para los derechos de las víctimas, especialmente ahora que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de El Salvador, ha revocado la reapertura del caso de la matanza de los jesuitas, que se aprobó tras la anulación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, nos lleva a constatar, de nuevo, los límites de la actual configuración de la justicia universal en nuestro ordenamiento y su impacto negativo en la consecución de la justicia. Ante delitos de esta naturaleza y la negativa del Estado donde se cometieron a perseguir y juzgar de manera efectiva, la lucha contra la impunidad tiene un margen de éxito muy limitado y su fracaso no es solo un perjuicio para las víctimas directas, sino para toda la sociedad.

## LA INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LOS LITIGIOS LABORALES (SENTENCIA 146/2020 DEL TRIBUNAL SUPREMO)

EVA MARÍA RUBIO FERNÁNDEZ\*

### I. HECHOS

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó sentencia el 14 de febrero de 2020, desestimando el recurso 82/2017 de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación letrada de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (en adelante, CICAA) sobre la competencia de la jurisdicción española para conocer de una demanda de resolución de contrato de trabajo e indemnización de daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales interpuesta por una de sus trabajadoras. Así, confirmaba la Sentencia de 4 de noviembre de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social) y acogía, igualmente, lo solicitado también por el Ministerio Fiscal<sup>19</sup>.

Esta ciudadana de nacionalidad española había trabajado para dicha organización, desde 1985, como telefonista recepcionista, por contrato verbal, y como personal contratado desde 1987, siendo clasificada desde enero de 1994 como funcionaria en la categoría de servicios generales con similares funciones, constando en sus nóminas la categoría profesional de auxiliar administrativa (FJ Tercero, apartado 4).

### II. PROBLEMAS JURÍDICOS

Con carácter previo al examen de la cuestión de fondo, el Tribunal Supremo recordó que la exigencia de la concurrencia del presupuesto de contradicción no cabía en este supuesto al considerarse la posible jurisdicción de los tribunales españoles una cuestión de orden público a conocer de oficio (FJ Segundo, apartado 1)<sup>20</sup>. A su vez, decidió el examen conjunto de los tres motivos del recurso, aunque en la sentencia se aprecia el pronunciamiento sucesivo y, en gran medida, separado de los mismos (*ibid.*, apartado 2).

El Tribunal Supremo, en primer lugar, delimita el marco jurídico interno aplicable con

---

\* Profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Universidad de Murcia ([evrubio@um.es](mailto:evrubio@um.es)).

<sup>19</sup> Sentencia del Tribunal Supremo 146/2020, Fundamento Jurídico (en adelante, FJ) Primero, apartado 2 *in fine*.

<sup>20</sup> Las sentencias señaladas como contradictorias por orden de motivos fueron: la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 6409/2015, de 28 de octubre de 2015; la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 345/2008, de 5 de mayo de 2008; y, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 450/2004, de 24 de mayo de 2004. En ellas, los fallos estimaban la inmunidad de jurisdicción respecto de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la Energía de Fusión, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y al Organismo Internacional del Consejo Oleícola Internacional, respectivamente.

referencias a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) (arts. 9, 21 y 25) y a la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, *sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones Internacionales celebradas en España* (Ley Orgánica 16/2015)<sup>21</sup>, a la que dedica una especial atención recogiendo algunos contenidos de su Preámbulo, entre ellos el único párrafo dedicado a su Título V (“Privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales con sede u oficina en España”) y la referencia a sus artículos 4, 10 y 35.1 (FJ Cuarto).

Siendo la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmunidad de las organizaciones internacionales y la Ley Orgánica 16/2015, este comienza su desestimación del primer motivo alegado (*incumplimiento del Convenio de Sede entre el Estado español y la CICA, firmado en Madrid el 29 de marzo de 1971*)<sup>22</sup> recordando su jurisprudencia (y la del Tribunal Constitucional) sobre el alcance y los límites de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estados extranjeros en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, de acuerdo con la interpretación de inmunidad relativa<sup>23</sup>. De este modo, se reitera que el régimen de inmunidad de Estados extranjeros no es en sí mismo y en todo caso contrario al derecho a la tutela judicial (art. 24 Constitución española), excepto en caso de no responder a lo previsto en el artículo 21.2 LOPJ, esto es, en el supuesto de indebida extensión o ampliación de dicha inmunidad, ya que su “ratio” no es suministrar “una protección indiscriminada”, sino la garantía del principio de igualdad soberana y de cooperación pacífica, debiendo distinguirse entre los actos *iure imperii* y los actos *iure gestionis* (FJ Quinto, apartado 1).

Afirmando la claridad de la Ley Orgánica 16/2015 a la hora de no extender la inmunidad a las controversias particulares de personal, si el servicio no supone el ejercicio de los poderes públicos de la entidad, ni se trata de personas empleadas en las categorías señaladas su texto (art. 10, apartado 2), el Tribunal Supremo concluye la imposibilidad de apreciar la inmunidad de jurisdicción contemplada por el artículo 11 del Convenio de Sede insistiendo en la distinción entre *el imperio y la gestión*, desacertada en el caso de las organizaciones internacionales<sup>24</sup>. Se señala, así, la inexistencia de indicio suficiente de afectación del ejercicio de poder público de la organización en las funciones de la demandante, correspondiendo a la organización la carga probatoria, sin que el nivel de retribución percibida, por sí solo, sea prueba suficiente de ello. Conclusión que, en

<sup>21</sup> BOE núm. 258, de 28 de octubre de 2015, pp. 101299-101320.

<sup>22</sup> BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 1971, pp. 18494-18497.

<sup>23</sup> Sentencias de 22 de junio de 2009 (recurso error judicial 6/2008); núm. recurso 2568/2011, de 25 de junio de 2016; y, 339/2018, de 22 de marzo de 2018. Respecto del Tribunal Constitucional, Sentencias núm. 107/1992, de 1 de julio; 292/1994, de 27 de octubre; 140/1995, de 28 de septiembre, 18/1997, de 10 de febrero; y, 176/2001, de 17 de septiembre, así como el Auto 112/2002, de 1 de julio.

<sup>24</sup> Véanse P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, “Las inmunidades de las Organizaciones Internacionales: Perspectiva general y española”, en J. MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (Dir.), *La Ley Orgánica 16/2015 sobre Privilegios e Inmunidades: Gestación y Contenido*, Cuadernos de la Escuela Diplomática núm. 55, Escuela Diplomática, Madrid, 2016, pp. 205-231, pp. 209, 213-214 y 224, y J. GONZÁLEZ VEGA, “Inmunidades, Derecho Internacional y tutela judicial en la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre inmunidades. ¿Juego de Espejos en el Callejón del Gato?, *REDI*, vol. 68, 2016-1, pp. 85-97, p. 94.

términos similares, sostiene alrededor de su acreditación como personal contratado en el registro existente a tal efecto en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (en adelante, MAEC)<sup>25</sup>, donde, además, no consta en la lista del cuerpo diplomático y consular acreditado en nuestro país<sup>26</sup> (FJ Sexto).

Desaprovechada la ocasión de examinar el juego de la inmunidad de la CICAA en virtud del Convenio de Sede y la posible aplicación subsidiaria de la Ley Orgánica 16/2015 al hilo del primer inciso del art. 35.1, en lo que hubiera sido la opción más técnicamente apropiada (y coherente con la decisión inicial adoptada por el propio Tribunal), ni siquiera el examen del segundo motivo alegado (*vulneración del art. 35.1 de la Ley Orgánica 16/2015*) lleva a nuestro Tribunal Supremo a reflexionar sobre el fundamento funcional de esta inmunidad (“respecto de toda actuación vinculada al cumplimiento de sus funciones”). Tras reiterar la mención del ejercicio del poder público y los criterios ya expuestos de sus límites, eso sí, pasará a centrarse en el examen de las vías alternativas razonables de solución de controversias respecto del derecho a la tutela judicial efectiva (segundo párrafo art. 35.1) (FJ Séptimo), si bien omitiendo cualquier referencia a los desarrollos efectuados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pudieran ser aplicables<sup>27</sup>.

La alegación de la CICAA alrededor de su existencia en virtud del artículo 44 (“Imprevistos”) de sus Estatutos y Reglamento del Personal<sup>28</sup> y el juego del artículo 23.4 del *Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) relativo al establecimiento de la oficina de esta Organización en España*, hecho en Madrid el 4 de abril de 2013<sup>29</sup>, que, en última instancia, establece la competencia del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (TAOIT) o el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, según el caso y el Manual Administrativo de la FAO, es desestimada al entenderse que el artículo 44 presenta términos “vagos, genéricos e imprecisos”, no siendo la aplicación subsidiaria de los Estatutos de la FAO “en modo alguno automática o incondicionada”, pues queda al “libre arbitrio” de la CICAA, sin que el Acuerdo entre la FAO y esta

<sup>25</sup> MAEC, *Guía Práctica del Cuerpo Diplomático acreditado en España*, 7ª edición, 2017, disponible en <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/Protocolo/Documents/GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20CD%202017.pdf>.

<sup>26</sup> Estas últimas listas pueden ser consultadas en su última actualización (5 de noviembre de 2020) en: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/Protocolo/Paginas/Informacion-para-el-Cuerpo-diplomatico-acreditado.aspx>.

<sup>27</sup> Sobre los mismos, véanse P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, *op. cit.*, pp. 211-213 y 221, y D. GONZÁLEZ HERRERA, “Breves reflexiones en torno a las inmunidades de las Organizaciones Internacionales”, en J. MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (Dir.), *La Ley Orgánica 16/2015 sobre Privilegios e Inmunidades: Gestación y Contenido*, Cuadernos de la Escuela Diplomática núm. 55, Escuela Diplomática, Madrid, 2016, pp. 235-255, pp. 252-253.

<sup>28</sup> Este artículo establece que: “Para aquellas cuestiones no previstas de manera específica en estos Estatutos y Reglamento del Personal de ICCAT, podrían aplicarse subsidiariamente los Estatutos y Reglamento del Personal en vigor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). No obstante, todas estas materias se someterán debidamente por el Secretario Ejecutivo a la consideración de la Comisión” (*Estatutos y Reglamento del Personal*, adoptados en 1969 y posteriormente revisados, disponibles en: <https://www.iccat.int/es/>).

<sup>29</sup> BOE núm. 102, de 29 de abril de 2013, pp. 32253-32261.



organización (1973)<sup>30</sup> contenga tampoco referencia alguna a la cuestión.

Más aún, ahonda en la consideración de que la CICAA no es un organismo especializado de Naciones Unidas, ni se encuentra entre sus Fondos, Programas y Agencias especializadas afiliadas a este sistema<sup>31</sup>, lo que conllevaría la competencia del Tribunal Contencioso-Administrativo de Naciones Unidas. Tampoco consta que se haya celebrado el acuerdo especial con la Secretaría General de Naciones Unidas aceptando la competencia del mismo, conforme al artículo 2.5 de su Estatuto<sup>32</sup>, pudiendo interpretarse el artículo 44 como una “mera manifestación unilateral” sin efectos para dicho tribunal<sup>33</sup>.

En cuanto al último motivo alegado (*incompetencia del orden social de la jurisdicción por tener la demandante la condición de funcionaria de la organización*), el Tribunal parte de que la pretensión última del mismo es la declaración de falta de competencia de nuestros tribunales. Incluso con ello, descarta la competencia del orden contencioso-administrativo por: a) la base alegada en la demanda (artículo 50, “Extinción por voluntad del trabajador”, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, *por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores*); b) la imposibilidad de trasladar la normativa española aplicable al personal funcional y por la letra del artículo 24 LOPJ, salvando la referencia a “funcionarios” presente en el versión española de los *Estatuto y Reglamento del Personal* de la CICAA en lectura combinada con la versión inglesa<sup>34</sup>; c) la imposibilidad de asociar la inscripción en el registro específico del MAEC con la condición de personal funcional que justificaría la competencia del orden contencioso-administrativo; y d) los precedentes de esta misma Sala en casos de personal de embajadas y legaciones extranjeras en España (FJ Octavo).

Nos encontramos, en definitiva, con un fallo que no debe ser interpretado en su resultado último como sorprendente o traicionero por parte de la CICAA o de otras Organizaciones Internacionales en la medida en que el MAEC ha remitido Notas Verbales Circulares (6/7, de 1 de febrero de 1990, y 16/7, de 5 de julio de 2010) e incluido recomendaciones en su *Guía Práctica del Cuerpo Diplomático acreditado en España*, poniendo de manifiesto esta tendencia en la apreciación de la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales sociales, la importancia de respetar el Derecho Laboral y de la Seguridad Social español y “los graves perjuicios que suele deparar su incumplimiento”<sup>35</sup>.

<sup>30</sup> Su texto puede consultarse en: <https://www.iccat.int/Documents/Commission/BasicTexts.pdf>.

<sup>31</sup> La CICAA es un organismo regional de pesca establecido fuera del marco de la FAO, aunque teniendo esta las funciones de depositaria de su tratado constitutivo (Convención Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, Río de Janeiro, 1 de abril de 1966) y su Protocolo., que se pueden consultar en: [http://www.fao.org/treaties/results/en/?search=adv&subj\\_coll=No\\_ArticleXIV](http://www.fao.org/treaties/results/en/?search=adv&subj_coll=No_ArticleXIV).

<sup>32</sup> Véase Resolución de la Asamblea General 63/253, de 24 de diciembre de 2008, posteriormente enmendado y disponible en: [https://www.un.org/en/internaljustice/pdfs/UNDT\\_Statute.pdf](https://www.un.org/en/internaljustice/pdfs/UNDT_Statute.pdf)

<sup>33</sup> Ninguna referencia se hace al TAOIT, quizá a consecuencia del texto del recurso. Sin embargo, en la información al respecto disponible en su web tampoco consta que se haya aceptado su competencia por la CICAA (<https://www.ilo.org/tribunal/membership/lang--en/index.htm>).

<sup>34</sup> Llama la atención que, para reforzar su argumentación, no haga referencia al artículo 5 de los *Estatutos y Reglamento del Personal* donde se define la categoría de Servicios Generales (GS), poseída por la ciudadana española, como la correspondiente a puestos de auxiliares técnicos y administrativos, así como personal empleado, secretariado y personal diverso de oficina, usualmente contratados a nivel local.

<sup>35</sup> MAEC, *Guía Práctica*, op. cit., pp. 42-43.



### **III.- CONSIDERACIONES FINALES**

Este primer pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la inmunidad de las organizaciones internacionales a la luz de la Ley Orgánica 16/2015, pudiendo haber sido el golpe de timón que hiciera virar la deriva predominante de nuestros tribunales de extender los fundamentos de la inmunidad de los Estados a la de las organizaciones internacionales, ha supuesto una oportunidad perdida para la correcta aplicación de su artículo 35.1. Ciertamente es que el resultado ha derivado en la protección de la particular al garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva, vistas las imprecisiones del régimen de personal de la CICA respectivamente al acceso a la vía alternativa razonable. Habrá que esperar, pues, cual Penélope, para ver si nuestros tribunales deciden aplicar plenamente este artículo y, quién sabe, si para interpretarlo, en su caso, en aras de verificar que la vía alternativa reúne todas las exigencias requeridas por el derecho a la tutela judicial efectiva.